



► Vehículos del ejército mexicano llegan a Cercoahui, México, el miércoles 22 de junio de 2022, donde dos ancianos sacerdotes jesuitas fueron asesinados dentro de una iglesia.

El nuevo plan de México contra la violencia de los cárteles

El alcalde de la capital del estado de Guerrero fue asesinado mientras la nueva presidenta Claudia Sheinbaum pretende “pacificar el país” reduciendo los homicidios.

José de Córdoba / The Wall Street Journal

La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, utilizará sus primeros 100 días en el cargo para tratar de reducir los homicidios y aflojar el control de los grupos del crimen organizado que controlan zonas del país, extorsionan a empresas, trafican con drogas y matan impunemente.

Entre los principales esfuerzos de Sheinbaum para “pacificar el país” se encuentra una campaña para reducir drásticamente los homicidios en las 10 ciudades más mortíferas del país, incluidas Tijuana y Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos,

según un documento en el que se presenta la estrategia y al que ha tenido acceso The Wall Street Journal. También planea nuevos esfuerzos para combatir el contrabando de la mortal droga fentanilo, que mata a decenas de miles de estadounidenses al año, según la presentación.

Se espera que Sheinbaum desvele la estrategia de seguridad esta misma semana, un momento crucial para la seguridad de México, ya que se están produciendo enfrentamientos entre facciones rivales del cártel de Sinaloa, grupo responsable de gran parte del fentanilo y otras drogas que llegan a Estados Unidos a través de la frontera mexicana-

na. Ya ha dicho que aumentará la coordinación entre los fiscales estatales y federales de México y las fuerzas de seguridad para combatir los focos más violentos del país.

“Estamos desarrollando un programa para los municipios que en este momento tienen el mayor número de homicidios”, dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa poco después de asumir el cargo el 1 de octubre.

Durante décadas, todos los presidentes mexicanos han hecho de la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales del país una prioridad, pero estas bandas se han mostrado resistentes a los esfuerzos por desbancarlas del lucrativo contrabando

de drogas en medio de una corrupción endémica.

El presidente conservador Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles, dando paso a un periodo de violentos conflictos entre las bandas y las fuerzas gubernamentales, mientras que el mentor de Sheinbaum, el ex-presidente nacionalista Andrés Manuel López Obrador, intentó un enfoque más suave apodado “abrazos, no balas”. Ninguno de los dos funcionó. Las bandas se han diversificado hacia la extorsión, el contrabando de personas y el robo de combustible.



► La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anuncia a los miembros de su gabinete en Ciudad de México.

Sheinbaum quiere repetir el éxito que tuvo en Ciudad de México, donde el número de homicidios se redujo a la mitad durante su mandato. Su jefe de seguridad, Omar García Harfuch, ahora ministro de Seguridad de México, trabajó estrechamente con las fuerzas de seguridad estadounidenses y aumentó la recopilación de información, la preparación de la policía y los salarios. Funcionarios estadounidenses afirman que esperan que la cooperación en materia de seguridad aumente durante la presidencia de Sheinbaum.

Gran parte de la violencia en México es obra de bandas dedicadas a actividades delictivas. Miles de mexicanos son ejecutados por grupos delictivos enfrentados que se disputan las rutas para el contrabando de millones de pastillas de fentanilo hacia Estados Unidos. Las bandas también conducen a migrantes hacia Estados Unidos desde la frontera de México con Guatemala. Otros mueren en peleas por el multimillonario negocio del contrabando de combustible desde las refinadoras del estado de Guanajuato. La extorsión es endémica en todo el país, y especialmente en el estado occidental de Michoacán, sede de la industria de la lima, un producto básico

clave para la alimentación.

El plan de seguridad de Sheinbaum prevé el uso intensivo de los servicios de inteligencia para evaluar la estructura de los grupos delictivos, y la búsqueda de formas de utilizar la inteligencia policial para preparar los casos en los juicios.

“La lucha es por los centros logísticos, y no se trata solo de drogas”, dijo Alberto Islas, consultor de riesgos en Ciudad de México. “También es la gasolina, las limas y los migrantes”.

Los cárteles de México han sido un tema en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump ha dicho que consideraría ataques militares contra ellos, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris dijo recientemente que duplicaría los recursos que el Departamento de Justicia dedica a combatir a las organizaciones criminales.

En la presentación de Sheinbaum vista por el Journal, las fuerzas de seguridad de México apuntarían a 10 ciudades en cinco estados, que por sí solas representan uno de cada cuatro asesinatos relacionados con el crimen organizado.

“La identificación de 10 municipios prio-

ritarios es muy buena”, dijo John Creamer, exdiplomático estadounidense de alto rango en México. Queda por ver si el gobierno aportará fondos y recursos humanos suficientes para la tarea, añadió.

Entre las seis primeras ciudades objetivo se encuentra Colima, en el oeste de México. Es el municipio más violento de México, con una tasa de homicidios relacionados con el crimen organizado de 173 por cada 100.000 habitantes. Acapulco, el marchito balneario del Pacífico, duramente golpeado por dos grandes huracanes el año pasado, también figura en la lista inicial. Acapulco tiene una tasa de homicidios relacionados con el crimen organizado de 85 personas por cada 100.000. En comparación, el estado de EE.UU. con la tasa de homicidios más alta es Misisipi, con 20,7 por cada 100.000 habitantes, según el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias. Esta cifra es aproximadamente la misma que la tasa nacional de homicidios relacionados con el crimen organizado en México, que es de 20,5 por cada 100.000.

Sheinbaum también tiene previsto centrarse en Guanajuato, centro industrial, que registra el mayor índice de asesinatos rela-

cionados con el crimen organizado de todos los estados mexicanos. Situado en el centro de México, es un campo de batalla para el lucrativo mercado negro de combustible controlado por el cartel de Jalisco, uno de los grupos de delincuencia organizada más poderosos de México, y la banda local de Santa Rosa de Lima.

El gobierno de Sheinbaum también planea centrarse en Chiapas, el estado sureño fronterizo con Guatemala donde la violencia ha aumentado considerablemente este año por el control de las codiciadas rutas de contrabando de personas.

Otra ciudad a la que el nuevo gobierno presta atención es Culiacán, capital del noroccidental estado de Sinaloa, que se ha visto inmersa en una guerra territorial entre dos facciones del cartel de Sinaloa, la principal organización de contrabando de fentanilo de México.

Más de 150 personas han muerto tras los enfrentamientos entre los “Chapitos” -los hijos del encarcelado capo Joaquín “el Chapo” Guzmán- y una facción liderada por Ismael “Mayito Flaco” Zambada, hijo del patriarca del cartel Ismael “El Mayo” Zambada. El mayor de los Zambada fue traicionado por Joaquín Guzmán López, un hijo del capo encarcelado que voló a Estados Unidos en julio tras secuestrar aparentemente a El Mayo. Ambos hombres fueron detenidos por agentes estadounidenses tras aterrizar en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas.

El plan de Sheinbaum exige que el gobierno ponga fin a la extorsión en la industria de la lima en el estado agrícola de Michoacán, donde una docena de bandas se aprovechan de cultivadores, envasadores y distribuidores. Los grupos delictivos suelen manipular el precio de la lima, un producto que la mayoría de los hogares mexicanos compran con frecuencia. En agosto, López Obrador dijo que enviaría tropas de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad a Michoacán después de que las empacadoras de lima se declararan en huelga para protestar por el aumento de las demandas de extorsión, lo que provocó el cierre del resto de la industria.

El plan de seguridad prevé un mayor papel para el gobierno federal, con su gabinete de seguridad nacional investigando a los jefes de seguridad estatales nombrados por los gobernadores. El gobierno federal también establecería normas nacionales para los 32 cuerpos de policía, fiscalías y sistemas penitenciarios estatales de México.

En México se presentan pocas denuncias penales, y menos se llevan a juicio. Pero el mes pasado, en su último gran acto, López Obrador logró que el Congreso aprobara una reforma judicial que exige que todos los jueces federales sean elegidos por votación popular.

“La estrategia declarada es una gran hazaña”, dice Renato Sales, exjefe de seguridad mexicano. “Esperemos que los resultados no se vean comprometidos por la inestabilidad causada por la ausencia de jueces” mientras se aplica la reforma. ●